

Señores**JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL VALLE DEL CAUCA
(REPARTO)
Ciudad**

CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA, mayor de edad, vecina de Cali Valle, identificada con la cédula de ciudadanía No.38.853.482 de Buga (Valle), mediante el presente escrito, me permito conferir poder especial, amplio y suficiente a la doctora **MARICEL MONSALVE PEREZ**, mayor de edad, vecina de Cali (Valle), identificada con cédula de ciudadanía No. 66.718.110 de Tulúa Valle, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No.122.503 del CSJ, para que en mi nombre y representación presente Demanda de Medio de Control de Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, representada legalmente por el Dr. MAURICIO OLIVERA GONZALEZ, o por quien haga sus veces al momento de la notificación de la demanda y en el transcurso del proceso, a fin de que:

PRIMERO: Se declare que la Señora **CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA**, es beneficiaria del Régimen de Transición y por tal razón se debe aplicar el monto, edad y semanas establecidos en la ley 33 de 1985 y la ley 62 de 1985, para acceder a la pensión de vejez.

SEGUNDO: Se declare la nulidad parcial de la Resolución GNR 246356 del 03 de Octubre de 2013.

TERCERO: Se declare la nulidad de la Resolución GNR 272549 del 30 de Julio de 2014.

CUARTO: Se declare la nulidad de la Resolución GNR 414168 del 21 de Diciembre de 2015.

QUINTO: Se declare la nulidad de la resolución GNR 48491 del 15 de Febrero de 2016.

SEXTO: Se declare la nulidad del Acto Ficto producto del silencio administrativo negativo generado a raíz del Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución GNR 414168 de 2015, el día 06/01/2016.

SEPTIMO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones se reestablezca el derecho de la Señora CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA y SE CONDENE A LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, a la reliquidación de la mesada pensional teniendo en cuenta el salario promedio devengado durante el último año de servicio, incluyendo los factores salariales, a partir del 01/10/2013



OCTAVO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se reestablezca el derecho de la Señora CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA y se condene A LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, al pago del mayor valor sobre las mesadas pensionales reliquidadas a partir del 01/10/2013 y hasta que se realice la reliquidación debidamente actualizada de acuerdo con el índice de precios al consumidor según certificación expedida por el Dane.

NOVENO: Se condene a la A LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, a pagar a mi representado la indexación de las mesadas reliquidadas, desde el 01/10/2013 y hasta que se haga efectivo el pago de la sentencia.

DECIMO: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de establecido en el artículo 187 a 195 del CPACA.

DECIMO PRIMERO: Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el CPACA.

DECIMO SEGUNDO: Que se condene a la parte demandada a pagar las costas y gastos que ocasione el proceso.

DECIMO TERCERO: Fallese Ultra y Extrapetita.


Mi apoderada esta facultada conforme el artículo 70 del cpc, en especial a revocar, reasumir, renunciar, recibir, conciliar, transar, sustituir, cobrar, desistir, revocar, interponer recursos, solicitar reconocimiento de documento de contenido y firma y todas aquellas tendientes al fiel y buen ejercicio de su gestión.

Sírvase reconocer personería a mi apodera en los términos y para los efectos del presente poder.

Atentamente,


CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA
CC.No.38.853.482 de Buga Valle

Acepto poder,


MARICEL MONSALVE PEREZ
CC.No.66.718.110 de Tulua Valle
T.P.No.122.503 del CSJ



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE
DOCUMENTO PRIVADO**

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



12693

En la ciudad de Cali, Departamento de Valle, República de Colombia, el doce (12) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), en la Notaría Trece (13) del Círculo de Cali, compareció:

CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA, quien exhibió la cédula de ciudadanía / NUIP #0038853482 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



22xe954wjz9n
12/12/2016 - 14:18:56

Lucia Bellini Ayala
----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado a través de autenticación biométrica, mediante cotejo de su huella dactilar contra la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de PODER ESPECIAL y en el que aparecen como partes CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA.

Lucia Bellini Ayala



LUCIA BELLINI AYALA
Notaria trece (13) del Círculo de Cali



Señores

JUZGADO ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO DE CALI VALLE DEL CAUCA (REPARTO)
E.S.D.

REF: Medio de control de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA

Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

MARICEL MONSALVE PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No.66.718.110 de Tulúa Valle, abogada inscrita y en ejercicio portadora de la tarjeta profesional No.122.503 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en representación de la señora **CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.853.482 de Buga (Valle), me permito presentar demanda basada en el **MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO** Del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA. (Ley 1437 de 2.011) en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, a fin de que sean declaradas nulas las resoluciones GNR 246356 del 03/10/2013, GNR 272549 del 30/07/2014, GNR 414168 del 21/12/2015, y GNR 48491 del 15/02/2016, se condene al restablecimiento del derecho como se solicita en la parte petitoria de la presente, con fundamento en los siguientes:

HECHOS:

- 1:** La Señora CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA, nació el 18/05/1957.
- 2:** Mi representada es beneficiaria del Régimen de Transición.
- 3:** La Señora CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA, laboró para el I.C.B.F, en el período comprendido del 25/04/1989 hasta el 30/11/2013.
- 4:** Mediante Resolución GNR 246356 del 03/10/2013, Colpensiones le reconoció la pensión de Vejez a mi representada, a partir del 01/10/2013.
- 5:** La liquidación de la mesada pensional, se realizó sobre un IBL de \$2.258.406.00, al cual se le aplicó la tasa de reemplazo del 75%.

6: Mediante Resolución GNR 272549 del 30/07/2014, Colpensiones reliquida la pensión de vejez a mi mandante.

7: La liquidación de la mesada pensional, se realizó sobre un IBL de \$2.334.053.00, al cual se le aplicó la tasa de remplazo del 75%.

8: El día 01/10/2015, bajo el radicado No. 2015_9371119, radique reclamación administrativa de solicitud de reliquidación de la pensión de vejez con el salario promedio devengado durante el último año de servicios.

9: Mediante Resolución GNR 414168 del 21/12/2015, Colpensiones niega la reliquidación de la pensión de Vejez a mi mandante.

10: El 06/01/2016, bajo el radicado 2016_124312, interpose Recurso de Reposición en Subsidio Apelación contra la Resolución GNR 414168 del 21/12/2015.

11: Mediante Resolución GNR 48491 del 15/02/2016, Colpensiones desata el Recurso de Reposición confirmando la Resolución GNR 414168 del 21/12/2015.

12: El promedio del salario devengado por mi representada durante el último año de servicios, periodo comprendido del 01/12/2012 al 30/11/2013, incluidos los factores salariales, arrojan un IBL de \$3.387.614.00, que multiplicado por la tasa de reemplazo del 75% arroja una mesada pensional para el año 2013 de \$2.540.770.

13: A la fecha, la demanda no ha resuelto el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución GNR 414168 del 21/12/2015

PRETENSION:

Con fundamento en los hechos expuestos, y las pruebas que se aportan y se practicarán en el transcurso del proceso, y habiendo reconocido personería para actuar a la suscrita, Solicito Señor Juez, que acepte las siguientes declaraciones y ordene lo siguiente:

PRIMERO: Se declare que la Señora **CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA**, es beneficiaria del Régimen de Transición y por tal razón se debe aplicar el monto, edad y semanas establecidos en la ley 33 de 1985 y la ley 62 de 1985, para acceder a la pensión de vejez.

SEGUNDO: Se declare la nulidad parcial de la Resolución GNR 246356 del 03 de Octubre de 2013.

TERCERO: Se declare la nulidad de la Resolución GNR 272549 del 30 de Julio de 2014.

CUARTO: Se declare la nulidad de la Resolución GNR 414168 del 21 de Diciembre de 2015.

QUINTO: Se declare la nulidad de la resolución GNR 48491 del 15 de Febrero de 2016.

SEXTO: Se declare la nulidad del Acto Ficto producto del silencio administrativo negativo generado a raíz del Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución GNR 414168 de 2015, el día 06/01/2016.

SEPTIMO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones se reestablezca el derecho de la Señora CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA y SE CONDENE A LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, a la reliquidación de la mesada pensional teniendo en cuenta el salario promedio devengado durante el último año de servicio, incluyendo los factores salariales, a partir del 01/10/2013

OCTAVO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se reestablezca el derecho de la Señora CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA y se condene A LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, al pago del mayor valor sobre las mesadas pensionales reliquidadas a partir del 01/10/2013 y hasta que se realice la reliquidación debidamente actualizada de acuerdo con el índice de precios al consumidor según certificación expedida por el Dane.

NOVENO: Se condene a la A LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, a pagar a mi representado la indexación de las mesadas reliquidadas, desde el 01/10/2013 y hasta que se haga efectivo el pago de la sentencia.

DECIMO: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de establecido en el artículo 187 a 195 del CPACA.

DECIMO PRIMERO: Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el CPACA.

DECIMO SEGUNDO: Que se condene a la parte demandada a pagar las costas y gastos que ocasione el proceso.

DECIMO TERCERO: Fallese Ultra y Extrapetita.

DISPOSICIONES QUEBRANTADAS:

Los actos administrativos demandados infringieron las normas generales del sistema general de seguridad social y las siguientes normas:

2

Constitución Política, el preámbulo y los artículos 1º, 2º, 4º, 11, 12, 13, 16, 25, 29, 39, 46, 48, 53, 55 y 58, Inciso 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985; Ley 62 de 1985, artículo 36 de la Ley 100 de 1993, decreto 4937 de 2009.

Con la presente demanda se pretende demostrar que se están violando normas de reconocimiento y liquidación de mesada pensional, normas de carácter legal y constitucional.

1. Derecho a la Seguridad Social artículo 48:

En que casos la seguridad social puede considerarse como derecho fundamental?

El inciso segundo del artículo 48 estipula: "Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social". El anterior precepto destaca las notas de universalidad y de irrenunciabilidad lo cual esta en consonancia con el carácter obligatorio de la seguridad social, señalado en el inciso primero del artículo citado. Entonces se tiene que un derecho universal, irrenunciable y además con la característica de obligatoriedad, debe ser considerado como un derecho fundamental, pues ningún otro derecho -que no sea fundamental- es universal e irrenunciable, y genera el carácter obligatorio, debiendo prestarlo el Estado, como uno de sus funciones esenciales. Si embargo, debe aclararse que la seguridad social se considera derecho fundamental solo sobre la base de los siguientes presupuestos: primero, que opere en conexión con otro derecho fundamental; segundo, entendida como la asistencia pública que debe prestarse ante una calamidad que requiera, de manera urgente, la protección del Estado y de la sociedad, por afectar de manera grave e inminente la vida humana o la salud; tercero, ante casos de extrema necesidad; y cuarto, que se pueda prestar de acuerdo con las posibilidades reales de protección que disponga el Estado.

Mi representada, laboro por más de veinte años (20), al servicio del Estado, máxime que la entidad pública expidió los respectivos certificados de salarios y factores salariales para bono pensional correspondiente al tiempo laborado y que obran en el expediente pensional, con los cuales se prueba el tiempo público.

La entidad accionada al ejercer su posición dominante, claramente escindió los conceptos y por ende tomó cada concepto de una ley diferente violando el principio de conglobamiento de la ley, pues aplicó la edad, tiempo de servicio y el monto del 75% estipulado en la ley 33 de 1985 y el IBL determinado por el inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993, a pesar de que la ley 33 de 1985 también había determinado el ingreso base de liquidación que se tomaría para liquidar la mesada pensional.

ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

En aplicación al principio de favorabilidad a mi representada se le debe liquidar la pensión de vejez, conforme lo establece la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 y Ley 62 de 1985.

NORMATIVIDAD APLICADA AL CASO EN ESTUDIO

Ley 33 de 1985

DECRETA:

ARTICULO 10. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

9

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

ARTICULO 3o. "...Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. ..."

La citada Ley señala, 20 años al servicio del Estado de manera continua o discontinua y 55 años de edad, requisito que cumplió mi representado.

LEY 62 DE 1985, del 16/09/1985, "Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985".

Artículo 1º. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.

La decisión de COLPENSIONES, de liquidar la pensión de vejez de mi mandante con el promedio de los salarios cotizados durante los últimos diez años, en aplicación del inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993, atenta contra la inescindibilidad de la norma, como lo estableció la Honorable Corte

Suprema de Justicia **SALA DE CASACIÓN LABORAL**, magistrado ponente **DR. LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ**, Radicación N° 26072 Acta N° 70, del 16 de agosto de 2005, en un caso similar.

CONCEPTO DE LA VIOLACION

El concepto de la violación hace referencia, a la vulneración de normas de orden constitucional y legal por parte de la entidad demandada al expedir los actos acusados, toda vez que no dio aplicación a las normas aplicables Conforme lo establece el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y la ley 33 de 1985 y la ley 62 de 1985, la entidad demandada al expedir los actos acusados, ha violado de manera injustificada los derechos fundamentales, **a La Seguridad Social, dignidad humana, , debido proceso, principio de favorabilidad e igualdad** y el PRINCIPIO DE INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, consagrados en cabeza de mi mandante, como se enuncian a continuación.

Ley 100 de 1993

Artículo 36. Régimen de Transición

La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y **liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos**. (El Subrayado es mió)

Régimen De Transición:

Un régimen de transición se aplica cuando se ha expedido una nueva ley, con el objeto de que algunos derechos que se encuentran adquiridos o que

están próximos a adquirirse, no se vean afectados con la nueva normatividad sino que al contrario sean respetados.

La edad, las semanas de cotización o el tiempo de servicios y el monto de la pensión de vejez de los hombres que tengan 40 años o más, las mujeres 35 años o más o mujeres y hombres que tengan más de 15 años de servicios o cotizados al sistema en abril 1 de 1994, no será la establecida en la ley 100 de 1993 sino en el régimen anterior al cual se encontraban vinculados.

La Corte constitucional en muchas de sus sentencias se ha pronunciado de acuerdo a como se debe liquidar la pensión de los afiliados que se encuentran en regímenes especiales, regímenes exceptuados o convencionales, dejando claro que el artículo 36 de la ley 100 de 1993 no se puede escindir y lo más importante es que el ingreso base de liquidación va completamente de la mano del monto pensional. Expresa la corte constitucional que en ningún momento la ley 100 de 1993, dividió la norma exigiendo requisitos de regímenes anteriores y requisitos de la ley.

A continuación relaciono los salarios devengados por mi representada durante su último año de servicios con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F), período comprendido del 01/12/2012 al 30/11/2013, incluyendo los factores salariales, conforme a certificado de fecha 19/05/2015.

| ASIGNACION BASICA | | | BONIFICACION DICIEMBRE | BONIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS | PRIMA DE VACACIONES + BONIFICACION | BONIFICACION JUNIO |
|-------------------|-----------|------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| AÑO | MES | SALARIO | | | | |
| 2012 | DICIEMBRE | 2.951.171 | 3.691.099 | | | |
| 2013 | ENERO | 3.014.434 | | | 2.190.219 | |
| 2013 | FEBRERO | 3.014.434 | | | | |
| 2013 | MARZO | 3.014.434 | | | | |
| 2013 | ABRIL | 3.014.434 | | 665.804 | | |
| 2013 | MAYO | 3.014.434 | | | | |
| 2013 | JUNIO | 1.839.033 | | | | 1.959.626 |
| 2013 | JULIO | 1.839.033 | | | | |
| 2013 | AGOSTO | 1.902.296 | | | | |
| 2013 | SEPTIEMBR | 2.028.674 | | | | |
| 2013 | OCTUBRE | 2.082.836 | | | | |
| 2013 | NOVIEMBE | 2.082.836 | 2.568.316 | | | |
| TOTALES | | 29.798.049 | 6.259.415 | 665.804 | 2.190.219 | 1.959.626 |

FRENTE A MI PRETENSIÓN El honorable consejo de Estado unifico el criterio jurisprudencial con respecto a la liquidación de la mesada pensional con el último año de servicio incluyendo los factores salariales en sentencia así.

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA, Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO
ARDILA, Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010).

Radicación número: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09)° 1

CONSIDERACIONES:

"En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios. Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, que al analizar la interpretación que debía otorgarse al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma anterior que enuncia los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar las cesantías y las pensiones, - de quienes se les aplica la Ley 6 de 1945. De la normatividad anterior a la expedición de la Ley 33 de 1985, tal como ocurre en el caso del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, se observa que los factores salariales que debían tenerse en cuenta para efectos de determinar la cuantía de la pensión de jubilación eran superiores a los ahora enlistados por la primera de las citadas normas, modificada por la Ley 62 de 1985; aún así, también de dicho Decreto se ha predicado que no incluye una lista taxativa sino meramente enunciativa de los factores que componen la base de liquidación pensional, permitiendo incluir otros que también fueron devengados por el trabajador. La Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año, en el sentido de considerar que aquélla enlista en forma expresa y taxativa los factores sobre los cuales se calcula el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de jubilación, trae como consecuencia la regresividad en los Derechos Sociales de los ciudadanos, pues se observa sin duda alguna que el transcurso del tiempo ha implicado una manifiesta disminución en los beneficios alcanzados con anterioridad en el ámbito del reconocimiento y pago de las pensiones. "

*"...Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los **factores que constituyen salario**, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando.*

Sobre el particular es pertinente aclarar, que existen algunas prestaciones sociales - a las cuales el mismo legislador les dio dicha connotación -, esto es, a las primas de navidad y de vacaciones, que a pesar de tener esa naturaleza, constituyen factor de salario para efectos de liquidar pensiones y cesantías, como expresamente quedó establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

No desconoce la Sala que el mencionado decreto no es aplicable al sub-lite, tal y como ya se expuso en consideraciones precedentes, por cuanto el presente asunto se rige por la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año; empero, constituye un referente normativo que demuestra el interés del legislador de tener dichas primas como factores de salario que se deben incluir al momento de efectuar el reconocimiento pensional.¹

Con base en lo anteriormente expuesto, en el caso concreto el actor tiene derecho a la reliquidación del beneficio pensional que le fue reconocido incluyendo los factores salariales devengados durante el último año de servicios y que la entidad accionada no tuvo en cuenta al liquidar su prestación.

En efecto, durante el último año de servicio, comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre de 2002, el actor devengó los siguientes conceptos: asignación básica; alimentación; bonificación por recreación; bonificación semestral; bonificación por servicios; diferencia de horario; dominicales y festivos; horas extras; inc. (sic) Antigüedad; prima de productividad; prima de navidad; prima de vacaciones; indemnización de vacaciones.

CAJANAL, de acuerdo con lo probado en el proceso, al liquidarle la pensión de jubilación tuvo en cuenta la asignación básica, dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y, diferencia de horario, factores que fueron devengados entre el 1 de abril de 1994 y el 31 de octubre de 2002.

En consecuencia, el actor tiene derecho a que se le reliquide su pensión de jubilación incluyendo como factores salariales la asignación básica; alimentación; bonificación semestral; bonificación por servicios; diferencia de horario; dominicales y festivos; horas extras; inc. (sic) Antigüedad; prima de productividad; prima de navidad; prima de vacaciones, tal como lo ordenó el A quo. ..."

**Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativa Sección Segunda, Sentencia del
25/02/2016, Consejero Ponente. Gerardo Arenas
Monsalve . Expediente 20130154101 Referencia
4683-2013**

¹ Al respecto, ver el concepto No. 1393 de 18 de julio de 2002, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce.

Consideraciones:

"(...)Quiere en esta oportunidad el Consejo de Estado señalar que, de conformidad con lo expuesto y como se expresó con anterioridad en esta providencia, el criterio invariable de esta corporación, sostenido en forma unánime por más de veinte años, ha sido y es que el monto de las pensiones del régimen de transición pensional del sector oficial comprende la base (generalmente el ingreso salarial del último año de servicios) y el porcentaje dispuesto legalmente (que es por regla general el 75%). La única excepción a este criterio la constituyen las pensiones de congresistas y asimilados, regidas por la Ley 4ª de 1992, en virtud de la cosa juzgada constitucional establecida en la Sentencia C-258 de 2013, pues conforme a la parte resolutive de la referida sentencia de control constitucional, "las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL), aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso 3º, de la Ley 100 de 1993, según el caso".

Quiere insistir el Consejo de Estado en las razones que sustentan su postura tradicional con respecto al ingreso base de las pensiones del régimen de transición, y que ahora reitera:

- 1. La complejidad de los regímenes especiales pensionales, aplicables en virtud del régimen de transición, hace altamente razonable la interpretación que tradicionalmente ha tenido esta Corporación respecto de la expresión "monto" contenida como criterio general en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.*
- 2. Esta interpretación ha sido compartida en múltiples sentencia de constitucionalidad y de tutela de la Corte Constitucional, por lo cual el Consejo de Estado la ha aplicado en forma reiterada y pacífica. La variación interpretativa que pretende introducir la Sentencia SU-230 de 2015, si se acogiera por el Consejo de Estado, afectaría el derecho a la igualdad de los ciudadanos beneficiarios del régimen de transición que tienen sus pensiones pendientes de decisiones judiciales o administrativas, y que constituyen un número significativamente menor de quienes se han beneficiado de la forma tradicional de liquidación, dada la inminente finalización del régimen de transición pensional. El principio constitucional de igualdad, en este caso se vería seriamente afectado en un aspecto cardinal de los derechos sociales como lo son las pensiones. Igual reflexión cabría sobre el impacto económico, que en todo caso ya se asumió para la generalidad de los pensionados, quedando muy pocos pendientes de esa decisión. Debe recordarse que el Acto Legislativo 1 de 2005, además de introducir el concepto de sostenibilidad financiera al sistema pensional, dispuso que el Estado "asumirá la deuda pensional que esté a su cargo".*
- 3. Los serios argumentos de desigualdad económica y social que sustentaron las decisiones de la Sentencia C-258 de 2013, incluido el relativo al ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen cuya constitucionalidad se definió en esa oportunidad, no pueden extenderse a las demás pensiones de los regímenes especiales del sector público que no tienen las características de excepcionales ni privilegiadas.*
- 4. La Corte Constitucional no ha rechazado la postura del Consejo de Estado en este punto en forma expresa, en acciones de tutela en las que esta Corporación haya sido accionada, por lo cual la Sentencia SU-230 de 2015 no le sería aplicable, dado que*

como tribunal supremo de lo contencioso administrativo, debería tener derecho, como mínimo a defender su posición en tales acciones. Cuando tal cosa suceda, es de esperar que la Corte Constitucional examine los argumentos aquí expuestos y debata a su interior el alcance de los mismos antes de pronunciarse sobre este importante tema.

5. Los principios de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, que la misma Corte Constitucional ha estimado incorporados a la Constitución Política colombiana en virtud del llamado "bloque de constitucionalidad", no se predicán exclusivamente de los cambios legales sino también de las variaciones jurisprudenciales. Si la interpretación tradicional del Consejo de Estado sobre el concepto de "monto" en las pensiones del régimen de transición del sector público se ha aplicado a la generalidad de los pensionados de dicho sector, tanto en sede administrativa como en las decisiones judiciales, y esa interpretación ha sido compartida por la Corte Constitucional en sentencias de constitucionalidad y de tutela, no parece acorde con los referidos principios de progresividad y no regresividad el cambio jurisprudencial que se pretende introducir con la Sentencia SU-230 de 2015. (...)"

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL FRENTE A LAS PRESTACIONES PERIÓDICAS.

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCION SEGUNDA - SUBSECCION "A"

Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil ocho (2008).

Radicación número: 25000-23-25-000-2002-06050-01(0363-08)

Actor: MARIA ARAMINTA MUÑOZ DE LUQUE

Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

3. RECTIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL.

3.1 ANTECEDENTES

"Tradicionalmente y en forma uniforme, esta Corporación ha venido sosteniendo la no caducidad de la acción contenciosa respecto de los actos administrativos **que reconocen** prestaciones periódicas de acuerdo a la prescripción establecida en el artículo 136 numeral 2° del C.C.A, modificado por la Ley 446 de 1998. Sin embargo, en esta oportunidad la Sala define un enfoque distinto a tal regulación; el planteamiento interpretativo novedoso surge previo examen del pensamiento jurisprudencial precedente y del alcance que al mismo puede otorgarse dentro del marco derivado de la Constitución Política de 1991, en lo concerniente al

carácter fundamental de los derechos vinculados a ciertos extremos esenciales de la seguridad social.

(...)En el sub examine, al tiempo que como quedó expresado en párrafos anteriores, la demanda contra los actos impugnados fue presentada por fuera del término de caducidad -cuestión que extrañamente ignoró el Magistrado que admitió la demanda y la Sala que la decidió-, sin embargo bajo la motivación expuesta precedentemente, su extemporaneidad se torna en una inconsistencia inane, pues en cualquier caso, **si no hay caducidad para los actos que reconocen prestaciones periódicas tampoco la habrá para aquellos que las niegan**, fundamento que facilita el examen de fondo del asunto propuesto en esta instancia.”.

COMPETENCIA Y CUANTIA:

Es competencia del Juez Administrativo del Circuito de Cali Valle del Cauca, en primera instancia por la naturaleza de la acción, el domicilio de la entidad demandada, y por la cuantía que se deriva de aquélla, la cual no excede de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como se determinará seguidamente:

ESTIMACIÓN RAZONADA:

Teniendo en cuenta que la reliquidación de la pensión de vejez, se debe reconocer a partir del 01/10/2013 y que la misma se debe liquidar sobre el salario promedio devengado por mi mandante durante el último año de servicios incluyendo los factores salariales, el cual arroja un valor de \$3.406.093.00, que al aplicarle una tasa de reemplazo del 75%, asciende a un valor de \$2.554.570.00., para el año 2013 actualizado con el IPC del año inmediatamente anterior según certificación expedida por el Dane, hasta la fecha de presentación de la demanda la cuantía asciende a **\$33.769.814.00**, como se relaciona a continuación:

| AÑO | VALOR DE LA MESADA ULTIMO AÑO DE SERVICIOS CON FACTORES SALARIALES | VALOR DE LA MESADA RECONOCIDA POR COLPENSIONES | DIFERENCIA DEL VALOR MESADA | NUMERO DE MESADAS | VALOR ADEUDADO MESADAS |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| 2013 | 2.540.710 | 1.784.500 | 756.210 | 3 | 2.268.630 |
| 2014 | 2.589.999 | 1.819.119 | 770.880 | 13 | 10.021.440 |
| 2015 | 2.684.793 | 1.885.699 | 799.094 | 13 | 10.388.222 |
| 2016 | 2.866.554 | 2.013.360 | 853.194 | 13 | 11.091.522 |
| TOTAL ADEUDADO | | | | | 33.769.814 |

Por consiguiente la cuantía la estimo en la suma de \$33.769.814.00, determinada según el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011 numeral 2.

ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

1. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, o por las personas privadas sujetas a este régimen del mismo orden cuando cumplan funciones administrativas.
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

FUNDAMENTOS LEGALES

Esta demanda se fundamenta en los artículos 138 y ss del C.PACA., Ley 1437 de 2011 y, en las disposiciones citadas en el acápite del quebrantamiento normativo.

LAS PERSONAS EN EL PROCESO Y SUS REPRESENTANTES

Parte demandada: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, representada legalmente por el Dr. Mauricio Olivera Gonzalez, o por quien lo reemplace o haga sus veces.

Parte demandante:

La Señora CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA, quien lo hace debidamente representada por la Suscrita MARICEL MONSALVE PEREZ, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 66.718.110 de Tuluá Valle, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 122.503 del C.S.J .

Interviniente:

El señor Agente del Ministerio Público, con quien ha de surtirse la tramitación del proceso.

comprendido del 25/04/1989 al 30/11/2013 de fecha 07/07/2015
(3 Folios)

10. Comprobante de pago del mes de Diciembre de 2012.
11. Comprobante de pago del mes de Enero de 2013.
12. Comprobante de pago del mes de Febrero de 2013.
13. Comprobante de pago del mes de Marzo de 2013.
14. Comprobante de pago del mes de Abril de 2013.
15. Comprobante de pago del mes de Mayo de 2013.
16. Comprobante de pago del mes de Junio de 2013.
17. Comprobante de pago del mes de Julio de 2013.
18. Comprobante de pago del mes de Agosto de 2013.
19. Comprobante de pago del mes de Septiembre de 2013.
20. Comprobante de pago del mes de Octubre de 2013.
21. Comprobante de pago del mes de Noviembre de 2013.

ANEXOS

- Poder.
- Lo señalado en el acápite de las pruebas.
- Copia de la demanda y sus anexos para el traslado a la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, al Ministerio Publico, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, copia simple para el archivo e igualmente en cd en archivo de texto (PDF), de acuerdo al artículo 199 del C.P.A. y C.A. (Ley 1437 del 2.011) modificado por el artículo 612 del C.G.P. (Ley 1564 del 2.012).

DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES:

- Las de mi poderdante, señora CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA, con domicilio en Cali, en la Calle 9 A No. 31-65 APTO 401 B/ CHAMPAÑAT.
- La entidad demandada Colpensiones, con domicilio en la Cali, puede ser notificada en la Cra. 42 No.7-10 Barrió los Cambulos.
notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co

- Copia de la demanda y sus anexos para el traslado a la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, al Ministerio Publico, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, copia simple para el archivo e igualmente en cd en archivo de texto (PDF), de acuerdo al artículo 199 del C.P.A. y C.A. (Ley 1437 del 2.011) modificado por el artículo 612 del C.G.P. (Ley 1564 del 2.012).

DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES:

- Las de mi poderdante, señora CECILIA ECHEVERRY GAVIRIA, con domicilio en Cali, en la Calle 9 A No. 31-65 APTO 401 B/ CHAMPAÑAT.
- La entidad demandada Colpensiones, con domicilio en la Cali, puede ser notificada en la Cra. 42 No.7-10 Barrió los Cambulos.
notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
- La suscrita con domicilio en Cali Valle, recibe notificaciones en la carrera 4 No. 11-33 Oficina 205 de Cali, Teléfono No. 5242363.
Correo electrónico: asistentejuridicoc1@imperaabogados.com.
- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en las siguientes direcciones:
Calle 70 No.4-60 de la ciudad de Bogotá y teléfono 255 89 55
Correo electrónico: buzonjudicial@defensajuridica.gov.co.
- El Ministerio Publico en las siguientes direcciones:
Calle 11 No.5 – 54 Edificio Bancolombia de Santiago de Cali y teléfono 390 83 83.
Correo electrónico: www.procuraduria.gov.co.

AUTORIZACION ESPECIAL:

Manifiesto al Señor Juez que proclamo como mi dependiente judiciales a:

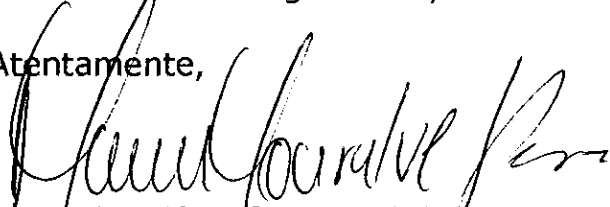
La señorita **STHAPHANIE OVIEDO TORRES**, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.144.046.461 de Cali Valle.

La señorita **MANUELA MONSALVE ARBOLEDA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.112.302.498 de Riofrio (Valle).

Las cuales quedan expresamente autorizadas, para que en virtud de su función, se notifiquen de las providencias dictadas, revisen el expediente, retiren los oficios, soliciten copias, radiquen memoriales, y demás funciones que atañen a su labor.

De los señores magistrados,

Atentamente,



MARICEL MONSALVE PEREZ

C.C. No. 66.718.110 de Tuluá Valle

T.P. No. 122.503 de C.S.J